



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, nueve de abril de dos mil veintiuno

S18-207

Proceso: **ORDINARIO LABORAL - APELACIÓN**
Demandante: **ADRIANA LUCIA ALZATE PINEDA**
Demandado: **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**
Radicado No.: **05001-31-05-018-2016-00478-01**
Tema: **Ineficacia y pensión vejez**
Decisión: **MODIFICA y ACLARA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, Porvenir S.A. y Colpensiones dentro del proceso de la referencia.

Conforme los poderes allegados, se reconoce personería tanto al apoderado principal Dr. FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI, en calidad de representante legal para procesos de Colpensiones de la firma PALACIO CONSULTORES S.A.S., así como a la apoderada sustituta Dra. INGRIS RUIDIAZ SOTO, identificados con la cédula de ciudadanía Nro. 71.379.806 y 1.085.169.921, Tarjeta Profesional Nro. 198.214 y 240.222, para que continúen representando los intereses de Colpensiones.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 10** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita la demandante en este trámite, en síntesis, que tras la declaratoria de nulidad del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliada al régimen de prima media con

prestación definida, sin solución de continuidad y conservando la calidad de beneficiaria del régimen de transición, ordenándose a Porvenir S.A. el retorno inmediato de todos los valores que recibió con motivo de la afiliación, tales como comisiones, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con sus respectivos frutos e intereses en la forma prevista en el art. 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubiesen causado.

Igualmente solicitó el reconocimiento de la PENSIÓN DE VEJEZ desde el 30 de enero de 2013, junto con los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 30 de enero de 1958, razón por la que es beneficiaria del régimen de transición en virtud de la edad al contar con más de 35 años al 1 de abril de 1994.
- ✓ Que se afilió al ISS el 16 de agosto de 1985, entidad a la que alcanzó a cotizar un total de 586.56 semanas hasta el 31 de marzo de 2000, época en la cual se trasladó a Porvenir S.A. al recibir una información que califican de errada, motivada entre otras razones, por la posible extinción del Seguro Social y la posibilidad de recibir dos pensiones, vejez y sobrevivientes (enlista la información suministrada y aquellos aspectos que nunca le explicó el asesor).
- ✓ Que mediante Resolución Nro. 013312 de 1992 el otrora ISS (como ARP) le reconoció la pensión de sobreviviente, la que hoy es pagada por Positiva S.A.
- ✓ Que a los 55 años solicitó ante Porvenir el otorgamiento de la pensión de vejez, oportunidad en la que le informaron que debía esperar dos años más. Posteriormente, en el año 2015, dicha entidad le indicó que no contaba con el capital necesario para financiar dicha prestación, ni tampoco podía acceder a la garantía de pensión mínima dado que recibía una pensión de sobrevivientes en cuantía superior al SMLMV.
- ✓ Que a la fecha ha cotizado al sistema 1.384 semanas de las cuales 852 lo fueron antes del 25 de julio de 2005.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido. Inicialmente se pronunció **COLPENSIONES** indicando que únicamente le constaban los hechos relacionados con la afiliación al otrora ISS, posterior traslado de régimen aspecto por el cual niega su calidad de

beneficiaria del régimen de transición, fecha de nacimiento de la demandante y su calidad de pensionada por sobrevivientes. Por su parte **PORVENIR S.A.** al dar respuesta a la demanda negó la existencia de algún vicio en el consentimiento, exponiendo además que la afiliación que databa del 30 de marzo del año 2000, se realizó de manera libre y voluntaria, sin que mediara ninguna prohibición legal, contando la reclamante con 6 años para retornar de régimen, tiempo suficiente que le permitió tener conocimiento acerca de las bondades y riesgos de su decisión, aunado a que recibió del asesor comercial información clara, completa y suficiente, por lo que hoy, 17 años después, no podía alegar un error, tampoco satisfacía los lineamientos de las providencias SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013, razón por la que no era titular de las prerrogativas del régimen de transición. Añade que NO podía recibir la garantía de pensión mínima, NO por su incompatibilidad con la prestación de sobrevivientes, sino porque esa mesada era superior al salario mínimo, aunado a que requería la aprobación de la OBP.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida el 18 de febrero de 2019 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, tras declarar la ineficacia del traslado al RAIS, ordenó a Porvenir S.A. a devolver en forma inmediata, todos los valores que se hubiesen causado con motivo de la afiliación (como cotizaciones, bonos pensionales y rendimientos), suma que debía recibir Colpensiones, entidad a la que condenó a reconocer y pagar a la demandante la PENSIÓN DE VEJEZ en calidad del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 758 de 1990, a partir del 1 de noviembre de 2015 en cuantía de \$661.764, cuantificando un retroactivo que al 31 de enero de 2019 ascendía a \$34.758.359, sobre el cual ordenó la indexación y autorizó a efectuar los correspondientes descuentos en salud. Prestación que a partir del 1 de febrero de 2019 debía continuar otorgando Colpensiones en el equivalente a \$918.731, teniendo en cuenta 13 mesadas anuales sin perjuicio de los incrementos a los que hubiere lugar.

Condenó en costas a las codemandadas, fijando como agencias en derecho 1 SMLMV a cargo de cada una.

Dentro del término otorgado por la Ley las partes interpusieron y sustentaron el recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DE LA JUEZ PARA CONDENAR

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no sucedió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

En cuanto a la pensión de vejez, consideró que era dable concederla con apego a lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 el cual le era aplicable dado que la demandante era beneficiaria del régimen de transición al contar con más 35 años al 1 de abril de 1994 y contar con 897 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, habiendo cumplido 55 años el 30 de enero de 2013, fecha para la cual superaba las 1000 semanas cotizadas, pues contaba con 1283, siendo dable reconocer la pensión a partir del 1 de noviembre de 2015, día siguiente al último aporte efectuado al régimen pensional. Para el cómputo del IBL tuvo en cuenta el de toda la vida laboral, al ser este el más favorable.

Negó los intereses moratorios deprecados al señalar que no se podía endilgar una mora a la administradora, dado que aquella no contaba con opción diferente a negar el reconocimiento de esta prestación, pero para que la demandante no recibiera un pago disminuido por la pérdida del poder adquisitivo, ordenó la indexación del retroactivo.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN

2.2.1. PARTE ACTORA

Aspira que se modifique la providencia en 3 puntos:

- ✓ Fecha de reconocimiento de la prestación. Indica que si bien la causación y disfrute son dos momentos diferentes, considera que este es un caso excepcional, distinto y sui generis, en donde NO se puede aplicar la regla general, toda vez que no era la intención de la demandante realizar cotizaciones adicionales que pudieran mejorar el monto de su prestación toda vez que para el año 2013, fecha en el que cumplió 55 años, ya tenía la densidad suficiente para acceder a la pensión de vejez e incluso la solicitó a Porvenir S.A., fondo en el que se encontraba afiliada para ese momento. Que fue en el año 2013 cuando recibió la información por parte de Porvenir S.A. relativa a que las mujeres en ese régimen

pensional NO se pensionan a los 55 años de edad, sino que a los 57. Que esta solicitud mostraba su clara intención de empezar a disfrutar de la prestación económica. Que las cotizaciones que se hicieron con posterioridad al mes de enero del año 2013, se debe a la inducción de error por parte de Porvenir, de ahí que deba reconocerse la prestación desde enero de 2013, fecha en la que no sólo tenía 55 años sino además la densidad suficiente, más 1.000 semanas de cotización.

- ✓ IBL: que si bien a la accionante le era más favorable optar por el promedio de toda su vida laboral, lo cierto es que según los cálculos que realizó, aquel debía ascender a \$792.000, superior a los \$735.293 liquidados por el despacho.
- ✓ Procedencia de los intereses moratorios: aunque advierte que el argumento del despacho para negar su imposición era válido, lo cierto es que la demandante desde el año 2013 o 2015, cuando efectuó su última cotización, tenía derecho a su pensión, y ésta NO fue reconocida por causa del error en que la hizo incurrir Porvenir, por lo que la peticionaria NO tenía porque verse perjudicada con la mora y no recibir los intereses que dispone el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En dichos términos aduce que debía imponerse la condena a Colpensiones autorizándose su recobro efectivo a Porvenir, causante de la ineficacia que se declaró en la decisión judicial, última responsable del pago de los intereses, y no castigar a la parte débil de esta relación y quien más perjudicada se había visto con este trámite administrativo-judicial, como lo era la demandante.

2.2.2. RECURSO DE APELACIÓN PORVENIR S.A.

Solicita que se absuelva a la administradora de la totalidad de cargos formulados en su contra.

Considera que de manera autónoma, mediando un consentimiento exento de vicio y con la observancia de las solemnidades exigidas por la ley para ese momento, la actora suscribió el formulario de manera libre y voluntaria, sin presión alguna como se evidencia en la solicitud de vinculación, prueba documental arrimada, por lo cual abrió una cuenta de ahorro individual; su firma ha sido autentica, no ha sido cuestionada a pesar que se aduzca que suscribió el documento sin la información suficiente acerca de los alcances del acto jurídico que celebraba, por lo cual NO existían fundamentos facticos o jurídicos para haber declarado una ineficacia.

Respecto a la carga de la prueba expone que le incumbe probar a quien pretende obtener algo en su favor, sin que baste su afirmación conforme lo normado en los artículos 167 y 1757 del

Código Civil, y si la parte no cumple con su carga, soporta el riesgo de una decisión desfavorable a sus intereses, y que si bien la juez aludía a la existencia de negaciones indefinidas, las mismas no se apreciaban en el escrito inaugural, ni en la forma como se habían redactado los hechos, por el contrario, solamente se indicaba que no se le dio una información acerca del régimen de transición, allegando Porvenir la prueba documental donde la actora daba cuenta que se le explicaron esos alcances. Aunado a ello considera que no es dable imputarle una carga probatoria respecto de hechos que ocurrieron hace más de 10 años

Aclara que en su momento se dio una asesoría verbal con una duración prolongada en el tiempo, cuya prueba de idoneidad y eficacia quedó signada en un formulario de afiliación, conforme la normatividad que para entonces regía, época para la cual, de acuerdo a lo narrado en el interrogatorio absuelto y lo dicho por el testigo Francisco, la empresa recibió en varias oportunidades a los fondos, mediante diversas visitas a las instalaciones, por lo que la actora había recibido más de una asesoría, por lo menos en el año 2000 y en el año 2006.

De otro lado aduce que existen *actos de relacionamiento* que indican la intención de la usuaria de pertenecer en un régimen pensional, voluntad plasmada no sólo en el formulario de traslado, sino en los diversos acercamientos con la administradora a través de los extractos entregados en forma periódica, los que nunca objetó, eventualmente solicitarle la prestación a Porvenir, aunado al tiempo de permanencia en el fondo privado sin presentar reparo, aspectos que evidenciaban el deseo de la demandante de permanecer en el RAIS, incluso a pesar de que el fondo NO le reconoció la prestación,

Finalmente solicita ser absuelta de la condena en costas pues considera que NO existen fundamentos facticos y jurídicos, y eventualmente eran necesario presentar algún tipo de oposición, máxime si se presume la validez de los actos y la buena fe al recibir a una usuaria proveniente del ISS.

2.2.3. RECURSO DE APELACIÓN COLPENSIONES

Solicita la modificación de la sentencia en lo atinente a los montos a retornar, toda vez que sólo se ordenó devolver el capital de la cuenta de ahorro individual, debiéndose extender tal devolución a la cuota de administración y pagos de seguros de invalidez y sobrevivencia, pues de lo contrario los operadores estarían incumpliendo su responsabilidad de cara al régimen de prima media y facilitando un enriquecimiento sin justa causa, dado que los fondos privados fueron

quienes actuaron por fuera de los parámetros legales y constitucionales y sin embargo cobraron una cuota de administración, usufrutuada a lo largo de los años de la afiliación de la demandante.

Que es de conocimiento público que en prima media las prestaciones económica son en un 80% subsidiadas por el Estado, por lo que se estaría causando en contra de Colpensiones un daño antijurídico (perjuicio causado a quien no tiene el deber de soportarlo), toda vez que en ningún momento tuvo injerencia en el traslado, siendo Porvenir la que faltó a su deber profesional de información y por ende causó una afectación en contra de la afiliada.

Si tenemos en cuenta todo lo anterior, el pago del monto del retroactivo causado entre el 1 de noviembre de 2015 hasta 31 de enero de 2019, conjuntamente con la indexación, debía estar a cargo de Porvenir, siendo así esta entidad quien debe soportar dicha carga del retroactivo, no Colpensiones al no tener ninguna injerencia en el traslado.

Frente a las costas procesales, recuerda que el Tribunal Superior de Medellín en su Sala laboral, ha sido unánime en señalar que si bien las mismas obedecen a un carácter objetivo, Colpensiones a ser una entidad pública, no puede allanarse a las pretensiones de una demanda, y por ende hace una excepción a la imposición de estas.

3. ALEGATOS

3.1. PRESENTADOS POR COLPENSIONES

Solicite se revoque la decisión adoptada en primera instancia o subsidiariamente se modifique la misma en los siguientes términos:

“(…) El art. 13 de la Ley 100 de 1993, que aseguró la libertad en escogencia de régimen pensional, por su parte el Decreto 663 de 1993 el cual aplica como regulación para las Administradoras de Fondos de Pensiones, toda vez que hacen parte del sistema como instituciones financieras privadas de carácter previsional encargadas de administrar eficientemente los fondos y planes de pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad y de los fondos de cesantías en Colombia; estableció en el Art. 97 la importancia del deber de informar al consumidor financiero, adicionalmente el decreto 692 de 1994, en su artículo 5 establece que las personas que cumplan los requisitos para seleccionar el régimen de ahorro individual con solidaridad no podrán ser rechazadas por las administradoras del mismo.

Ahora bien, es oportuno mencionar que solo para el 2014, con la expedición de la ley 1748, se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de los servicios financieros y consecuentemente diferentes niveles de intensidad del deber de información según la legislación vigente.

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando el caso que nos ocupa, tenemos que la señora Adriana Lucia Álzate Pineda, es su interrogatorio de parte manifestó, entre otras cosa, que se escuchaba que el seguro social se iba acabar, que el asesor de la AFP Porvenir sostuvo en las instalaciones de la empresa para la cual trabajaba en la época, una reunión colectiva de aproximadamente una hora, donde les manifestaron porque era conveniente el traslado, que lo más llamativo para ella fue la posibilidad de recibir dos pensiones, situación que no podía ocurrir si continuaba en el ISS.

Por su parte, el representante legal de la AFP Porvenir manifestó en el interrogatorio de parte absuelto bajo la gravedad de juramento, que la entidad, para la época del traslado de la demandante, tenía protocolos de las asesorías que los funcionarios de la AFP debían de aplicar al momento de brindar la información a los usuarios.

En este orden días, lo anterior, lleva a colegir que la AFP Porvenir cumplió con las obligaciones establecidas en los decretos 663 de 1993 y 692 de 1994, vigentes para la época de los hechos, y por su parte la señora Adriana Lucia Alzate Pineda, tomó la decisión sin presiones, libre y voluntaria de trasladarse de régimen pensional.

El Decreto 2241 de 2010, Por el cual se reglamenta el Régimen de Protección al Consumidor Financiero del Sistema General de Pensiones, en el artículo 4, establece los deberes del consumidor, entre los cuales tenemos, “Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo Sistema de Administración de Multifondos y de las diferentes modalidades de pensión”; se resalta del contenido normativo que el silencio se entiende “como la toma de decisión consciente con los efectos legales(...) y demás consecuencias que ello conlleve.”

La expedición de este decreto fue para el año 2010, sin embargo, el desconocimiento de la norma no exonera de responsabilidad a la señora Adriana Lucia Alzate Pineda y pese a que recibía extracto e información de la AFP Porvenir, no actuó con la diligencia que en estos casos se requiere, no cumplió con su deber de legal de indagar sobre las bondades de los regímenes pensionales, para efectos de haber tomado una decisión que le hubiese permitido trasladarse del Régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida.

Por todo lo anterior, de manera muy respetuosa le solicito a los señores magistrados revocar la sentencia de primera instancia en lo relativo a la declaratoria de ineficacia y consecuentemente la pensión de vejez a cargo de Colpensiones.

Ahora bien, en caso de que la decisión en esta instancia sea la de confirmar la sentencia emitida por la Juez 18 Laboral del Circuito, solicito a los señores magistrados modificar la sentencia, en el sentido de indicar que la AFP Porvenir traslade a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la señora Adriana Lucia Alzate Pineda, tales como: (i) cotizaciones, (ii) bonos pensionales, (iii) sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

Puntualmente, frente a las cuotas de administración, es oportuno precisar que el inciso 2 del artículo 20 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, establece la distribución de los porcentajes de cotización de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, indicando y para los efectos pertinentes, el hecho que un 3% del ingreso base de cotización será destinado “a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes”.

Ahora bien, el artículo 39 del decreto reglamentario 656 de 1994, define a la cuota de administración de la que se apropia la administradora del régimen de ahorro individual como aquella que “constituyen ingresos de las sociedades que administren fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho”. Determinado a continuación, de manera taxativa, sobre cuales conceptos se podía cobrar las comisiones correspondientes. Debe resaltarse el hecho que antes de la expedición de la ley 797 de 2003, y de conformidad con la Resolución 2549 de 1994, la cuota de administración en favor de éstas entidades lo era del 3.5%.

Atendiendo el derrotero en virtud de señalar que parte del patrimonio autónomo de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad se constituye con base en la cuota de administración que se cobra al afiliado al sistema general de pensiones, el literal f del artículo 60 de la ley 100 de 1993, el cual destaca entre otras, las características del RAIS, establece:

f. El patrimonio de las entidades administradoras garantiza el pago de la rentabilidad mínima de que trata el literal anterior y el desarrollo del negocio de administración del fondo de pensiones.

En ese orden de ideas, se colige el hecho que la cuota de administración cobrada por las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, es un INGRESO propio en favor de la generación de su patrimonio, todo ello, en virtud de la afiliación realizada por el cotizante obligatorio al sistema general de pensiones, debiendo destacarse el hecho, que de encontrarse, que si la misma se declara INEFICAZ o NULA en virtud a una afectación de la selección libre y voluntaria del régimen pensional o por faltarle a un requisito de existencia o validez, bien sea determinado por el a quo, estos dineros conjuntamente con sus rendimientos, generan un enriquecimiento sin justa causa a su favor y en desmedro de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, pues ella, NUNCA, desde la selección inicial de afiliación al RAIS por parte del afiliado, tuvo en su haber, la destinación o administración de esas sumas dinerarias, las cuales le hubiesen servido a efectos de capitalizar el fondo de naturaleza común.

Sobre la obligatoriedad de la devolución de los recursos previstos como cuotas de administración, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia reciente, con número de radicación 46292 expediente SL 17595 del 18 de octubre de 2017, Magistrado Ponente Fernando Castillo Cadena, ha sostenido: “La administradora de pensiones del régimen de ahorro individual tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor que fue anulada, con todos sus intereses y rendimientos que se hubieren causado”

Adicional a lo anterior, la administradora del Fondo Privado debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, esto para reiterar que los valores que la AFP traslade a Colpensiones deben ser debidamente para el momento en que efectivamente se realice el traslado de tales sumas de dinero.

En este orden de ideas, solicito señores magistrados, no condenar a Colpensiones, al pago de la indexación teniendo en cuenta que esta entidad no tiene su haber aportes de la señora Adriana Lucia Alzate Pineda, y si la pensión se reconoce mediante este proceso judicial no es porque haya sido una situación atribuible a Colpensiones, pues, es un tercero ajeno a las circunstancias fácticas que motivaron el presente proceso por lo que es la AFP, la llamada a responder por la indexación.

Frente a la pretensión de condenar a Colpensiones a los intereses moratorios, la suscrita llama la atención de los señores magistrados, para efectos de que se absuelva a la entidad de esta petición, teniendo en cuenta la jurisprudencia que sobre este tópico la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha emitido, entre ellas, la sentencia SL 704 de 2013:

“(…)

En sentencia de 13 de junio de 2012, rad. N° 42783, la Corte trajo a colación la de 29 de mayo de 2003, rad. N° 18789, donde se asentó esa postura (...).

Por último, respetuosamente le solicito al despacho revocar la condena en Costas impuesta en primera instancia a mi representada y no condenar en costas en esta instancia, teniendo en cuenta que Colpensiones ha actuado de buena fe, como institución de carácter público, tiene que someterse al imperio de la Ley y sus funcionarios actuar con sujeción estricta a la normatividad aplicable para cada caso.

3.2. ALEGATOS DE PORVENIR

Así se pronunció dicha entidad:

Mí representada no comparte la decisión a la cual arribó el Despacho en el sentido de declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la AFP de PORVENIR S.A., toda vez que no obra dentro del proceso ninguna prueba que respalde en forma fehaciente y concluyente la afirmación de la parte actora en el sentido de que se le omitió información en el momento de tomar la determinación de efectuar el traslado y más aún, teniendo en cuenta que obra prueba documental, esto es, formulario de vinculación a mi representada, en el cual la señora ALZATE PINEDA suscribió de su puño y letra que tomaba su decisión de traslado en forma autónoma y con el pleno conocimiento.

Solicito de manera respetuosa a los Señores Magistrados se modifique la decisión de primera instancia respecto al traslado por parte de mi representada a Colpensiones, ello teniendo en cuenta que, el Art. 20 de la ley 100 de 1993 modificado por el 7 de la ley 797 de 2003 establece que tanto en RPM como en RAIS un 3% del monto del IBC se distribuirá para el pago de las cuotas de administración y la financiación de la pensión de Invalidez y sobrevivencia a través del pago de un seguro previsional, lo que quiere decir que si la demandante se hubiese encontrado afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado hoy por Colpensiones, en dicho régimen se hubiera generado igualmente ese descuento para los mismos efectos, razón por la que, en este caso, no se puede entender, que las cuotas de administración se emplean como dineros que ayudan a la financiación de la pensión de vejez, pues las mismas se descuentan como retribución a la gestión de administración que realiza la administradora, y teniendo en cuenta que Colpensiones no fue quien administró los aportes de la parte demandante durante el tiempo de su afiliación al RAIS, no existe razón jurídica para que se le deban adjudicar tales conceptos a dicha administradora, máxime si se tiene en cuenta que al AFP que representó, reintegrará a la misma los rendimientos financieros que generó la juiciosa administración de los recursos de la señora demandante.

Al declararse la ineficacia del traslado cuando se ordena la devolución de recursos en aras de respetar las restituciones mutuas según se consagra en el artículo 1746 del C.C, no debe de incluirse las cuotas de administración, porque en primera medida, las restituciones mutuas surgen ante el deterioro sufrido en la administración del bien como lo dispone la ley, sin que para el caso exista prueba al respecto.

En segunda medida, no está consagrado según el articulado del Decreto 3995 de 2008 que exista obligación de las AFPS frente al traslado de estas cuotas ya causadas y pagadas. Y como tercera medida, no es financieramente posible el traslado de este rubro porque en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado a la compañía aseguradora quien cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza para la protección del afiliado ante posibles contingencias sobrevinientes durante su afiliación al RAIS, esta entidad ha sido destinataria de tales sumas como tercero que buena fe y bajo la presunción de validez y legalidad del acto de traslado que en su momento se realizó.

En este orden de ideas si lo que se pretende es buscar la compensación de aportes entre el RAIS y el RPM, se atiende a dicho interrogante con el traslado en unidades de los aportes realizados atendiendo a la rentabilidad acumulada y compensándose así las semanas sin que para el fondo común del RPM exista detrimento para sufragar las prestaciones debido a que los rendimientos tienen la tendencia a ser superiores al 50% o 100% el capital acumulado en la CAI, contrario cuando se trata del traslado de aportes provenientes del RPM en la medida que la devolución realmente se efectúa por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez de COLPENSIONES, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos, esto quiere decir que, la equivalencia no atiende a tasas variables que aumentan el capital gracias a los rendimientos, sino a una tasa regular por las reservas que COLPENSIONES tiene para el pago de las pensiones, o a la tasa regular determinada por la Superintendencia Financiera.

En consecuencia, pretendo con la presentación de los alegatos esbozados de forma subsidiaria, que la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de este distrito Judicial, revoque de manera parcial la Sentencia apelada, y se ordene que no haya devolución de las cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora por parte de mi representada.

3.3. ALEGATOS PARTE ACTORA

En síntesis, reitera lo expuesto en el recurso de alzada, insistiendo en la modificación de la providencia en tres aspectos. Esto dijo:

1.1. Sobre la causación del derecho a la mesada pensional de la demandante

(...) La demandante para el 30 de enero de 2013 tenía reunidos los requisitos para causar su derecho a la pensión de vejez, esto es, 55 años y más de 1000 semanas de cotización, teniendo presente que la señora Álzate Pineda es beneficiaria del decreto 758 de 1990 por aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Para el año 2013 la demandante solicitó a PORVENIR su derecho pensional por haber cumplido los 55 años, sin embargo, para ese momento un asesor le indicó que debía esperar hasta los 57 años para obtener el reconocimiento de su mesada pensional; y por tanto, debía continuar con el pago de los aportes pensionales.

Ya para el año 2015, cumplidos los 57 años a la demandante nuevamente la indujeron en error, pues ya la respuesta fue totalmente negativa al indicarle que al ser beneficiaria de una pensión de sobreviviente, NO tenía derecho a su mesada pensional.

En este sentido, H. Magistrados estamos bajo la teoría de la inducción a error tanto en el traslado como en el reconocimiento pensional, a la demandante la engañaron para trasladarse, y resultó nuevamente engañada por COLPENSIONES Y PORVENIR, quienes la obligaron a continuar realizando aportes a pensiones hasta el año 2015 momento para el cual la única opción que le dieron fue la pensión de garantía mínima, y una vez los cumplió le negaron su pensión.

Sobre la teoría de inducción a error por parte de los fondos de pensiones la H. Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha venido desarrollando ésta teoría en la sentencia del 5 de abril de 2011, proferida dentro del proceso radicado con el número 43564, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.

Es claro que ni COLPENSIONES ni PORVENIR tenían una razón que justificara que le demandante no solo perdiera su derecho a ser beneficiaria del régimen de transición, sino que además, tuviera que continuar cotizando más de las semanas suficientes para acceder a su derecho pensional, este tiempo cotizado después del año 2013 no le reporta ninguna clase de beneficio pensional, por el contrario, castiga a la parte débil de la relación sustancial, por un hecho ajeno a su voluntad, y bajo la confianza de dos entidades expertas en el sistema pensional.

Por esta razón, debe ser concedido el retroactivo pensional solicitado por la demandante desde el 30 de enero de 2013, momento para el cual ya tenía reunidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez y había solicitado el reconocimiento de su derecho pensional.

1.2. De la liquidación del Ingreso Base de Liquidación.

De acuerdo al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones, debe realizarse de acuerdo al promedio de toda la vida, o de los últimos 10 años.

Resulta claro, y así se indicó dentro del recurso de apelación que a la demandante le beneficia más la liquidación de sus salarios de acuerdo al promedio de todo lo cotizado en su vida laboral.

Por esta razón y al hacerse el respectivo cálculo pensional, a la demandante su IBL debe ser de \$ 792.000, muy superior al liquidado por el Despacho, y por esta razón solicito que se mejore este valor a la suma indicada o superior si lo consideran H. Magistrados.

1.3. De los intereses moratorios.

De acuerdo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 los fondos de pensiones deben pagar a los afiliados intereses de mora por la tardanza en el reconocimiento de los derechos pensionales.

Sobre este punto, está totalmente acreditada la tardanza tanto de PORVENIR como de COLPENSIONES, a la hora de resolver la solicitud pensional de mi mandante. Veamos:

- Mi mandante fue engañada tanto para el traslado de régimen, como para el reconocimiento de su derecho pensional, debió continuar realizando aportes al sistema pese a que su derecho se encontraba totalmente consolidado.
- Segundo la respuesta a su solicitud pensional fue totalmente arbitraria, no existe NINGUN fundamento jurídico para que a una persona beneficiaria de una pensión de sobreviviente NO pueda recibir una pensión de vejez.

En este orden de ideas, existe una tardanza a la hora de resolver la solicitud pensional de mi mandante quien lleva esperando 7 años el reconocimiento de su pensión de vejez, y a la fecha no ha podido disfrutarlo.

4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo a la inconformidad planteada en los recursos de alzada, el problema jurídico se circunscribe a determinar:

- ✓ Si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia, incluso respecto de la carga de la prueba.
- ✓ A partir de qué fecha debe reconocerse la prestación por vejez, analizando si se configuró una inducción en error respecto de las cotizaciones realizadas con posterioridad al cumplimiento de los 55 años, examinando además cuál entidad debe responder por su pago para efectos de determinar si es dable ordenar a Porvenir su otorgamiento.
- ✓ Si existe alguna falencia en la liquidación del IBL que cimente su modificación.
- ✓ Si es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993 a cargo de Colpensiones, facultándola a recobrarlos a Porvenir S.A.
- ✓ Qué haberes le corresponde retornar a la administradora del RAIS accionada.
- ✓ Igualmente a de examinarse la inconformidad de las accionadas en cuanto a la condena en costas.

Ahora, de resultar vencida en juicio Colpensiones imponiéndole la carga pensional, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios. Es por ello que también se estudiará si la señora Adriana Lucia Álzate es beneficiaria del régimen de transición y le es dable acceder a la pensión de vejez en los términos dispuestos por la a quo.

5. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que algunos fondos privados brindaban, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapa acumulativa			Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	de		Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia
ETAPA QUE	EN	LA SE		

ENCONTRABA LA DEMANDANTE	Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

En este orden de ideas, del recuento realizado así como del interrogatorio absuelto por la demandante se desprende, de un lado, que para la época de traslado al RAIS, concretamente 30 de marzo del año 2000 cuando suscribió el formulario de vinculación a Porvenir (fl.41) existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado básicamente por la posibilidad de recibir *dos pensiones* en el RAIS, la de sobrevivientes y la de vejez, dado su incompatibilidad en el régimen de prima media, o por lo menos aduce que eso fue lo que le explicaron.

Y es que expresamente la señora Adriana Lucía Álzate Pineda en el interrogatorio absuelto señaló que es tecnóloga en auxiliar de sistemas. Respecto a su traslado de régimen aduce que los asesores que llegaron dijeron que el Seguro Social se iba a terminar y que tenía mejores ventajas Porvenir, además le indicaron que como tenía una pensión de sobrevivientes Colpensiones NO le pagaría las dos pensiones, sino que se las promediarían, confió en eso y se pasó. Que la reunión fue general, dirigida a todos los que trabajaban en la empresa y duró una hora. Que la ventaja publicitada fue que le pagarían las dos pensiones, que no hizo preguntas, sólo confió en el asesor, recuerda que llenó una planilla con sus datos personales. Que no le explicaron como recibiría una pensión en el RAIS, sí sabe que trasladaban el bono pensional, que según tiene entendido es lo que había aportado de acuerdo a su salario. Desconoce qué sucedería en caso de morir afiliada a Porvenir. Que tampoco le explicaron qué era un sistema multi-fondos o que la pensión dependía de lo que tuviera ahorrado o de un capital, únicamente tenía entendido que recibiría una pensión apenas cumpliera la edad. Mucho después del traslado se enteró de lo que era un régimen de transición, sólo cuando llenó los papeles y le negaron la pensión se dio cuenta del error que había cometido. Que le llegaron extractos hasta la época que dejó de trabajar. Que para entonces no sabía cómo el seguro social reconocía la pensión, que esa información ya la vino a saber después, cuando pasó los papeles. Que no ha recibido asesoría de ningún otro fondo. Que demandó porque quiere su pensión. Finalmente adujo que no le hicieron comparativos de la mesada que recibiría en uno u otro régimen.

También se escuchó en interrogatorio al representante legal de Porvenir S.A., Dr. Juan Martín Galeano Jaramillo, y en lo que interesa a la Sala, bastará con señalar que ninguna confesión se desprende de su versión. Únicamente señaló que todos los asesores comerciales eran debidamente formados a través de jornadas de capacitación sobre diversos tópicos, cuya

intensidad horaria variaba, y detalló cual era el contenido de la información que suministraban a los posibles afiliados frente a las ventajas y desventajas de cada régimen, aclarando que cada uno de ellos recibía una comisión por afiliación, pero pervivían para los mismos la obligación de desanimar a quienes no les favoreciera el traslado.

También se escuchó la declaración del señor Francisco Alexander Marín Arroyave, compañero de trabajo de la demandante para el momento en que suscribió el formulario de vinculación a Porvenir S.A., fecha en la cual aquel también se trasladó. Aduce que recibieron juntos la misma asesoría oportuna en la que le indicaron que se pensionaría con más plata y más rápido, esa fue la idea que le vendieron, pero no le explicaron cómo, sólo después se enteró que eso dependía de una plata y alcanzó a retornar a Colpensiones, que tampoco hablaron del régimen de transición o garantía de pensión mínima o bono pensional o derecho de retracto o tiempo mínimo de permanencia, más que desanimarlos los incentivaban a firmar. Recuerda que la señora Adriana Lucía, *como es viuda hace rato, preguntó si se pensionaría normalmente* y le dijeron que sí, entraban de a grupos de 4 o 5 trabajadores y firmaban una hoja diligenciada por el asesor. Que nunca más volvió un asesor, los que sólo estuvieron una semana en la empresa.

En tal contexto, en gracia de discusión, si bien lo indicado por la demandante y el testigo pudiese dejar entrever cierta información suministrada al momento suscribir el formulario de vinculación al RAIS, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión anticipada en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si el obtener una pensión a una edad inferior es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se les habló de modalidades de pensión, aspecto vital si tenemos en cuenta que en algunas categorías donde existe una renta vitalicia, el riesgo financiero y de longevidad lo corre una aseguradora y no la afiliada por lo que la heredabilidad del capital adquiere otros matices, dado que en caso de muerte ostentando la calidad de pensionada y ante la inexistencia de beneficiarios, el capital de la cuenta de ahorro individual es inexistente al ser utilizado para el pago de una prima única por lo que ningún monto engrosa la masa sucesoral. Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que en todo caso NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario

NO se pensionaría y por lo menos que comprendiera que el monto de su mesada estaba atado al ahorro que efectuara a lo largo de su vida laboral.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a las administradoras del RAIS y no a la parte actora, a las que les correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Visto así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** en este punto la sentencia objeto del recurso de alzada.

En tal sentido, tal y como lo aclaró la falladora, se entiende que la demandante permanece en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, por lo que consecuentemente se encuentra a cargo de Colpensiones, y no de otra entidad, el reconocimiento y pago de las prestaciones que se deriven de los riesgos de vejez, invalidez y muerte, claro está, si se satisfacen los restantes requisitos que establece la ley.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígase aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarreará a las administradoras del RAIS accionadas, a trasladar a COLPENSIONES **todos** los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **ACLARARÁ** la decisión adoptada por la a quo, quien ordenó a Porvenir devolver todos los valores recibidos con motivo de la afiliación, citando algunos ejemplos (cotizaciones y rendimientos) sin especificar que ello comprendía los gastos de administración, los que, siguiendo el precedente sentado por nuestro órgano de cierre, está compuesto por los tres conceptos mencionados (gastos, seguros, fondo de garantía) y así se dirá en la parte resolutive del fallo.

La imprescindibilidad de tal aclaración incluso de deriva de lo expuesto por las partes, toda vez que incluso Colpensiones apela la decisión sustentando uno de sus puntos de inconformidad en la inclusión de los ítems en mención, y por su parte Porvenir S.A. en los alegatos presentados ante esta instancia, solicita su exclusión de la condena.

Recordemos que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que *«las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder»*, debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que lo procedente es el retorno de la totalidad del dinero recibido por concepto de afiliación, toda vez que no se puede ver afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente al monto total del correspondiente aporte legal.

Empero, esto no quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

Finalmente ha de aclararse que en caso de que el bono pensional al que tenía derecho la actora se encontrase redimido a la fecha de esta providencia y en su cuenta de ahorro individual, lo procedente NO será ordenar su entrega a Colpensiones, como lo estimó la juez, sino que Porvenir, en conjunto con la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, realizaran las gestiones pertinentes de acuerdo a las competencias legales, en aras de su anulación y retorno al ente ministerial.

PENSIÓN VEJEZ

Respecto a su causación, al entenderse que la afiliada permaneció sin solución de continuidad en el régimen de prima media, le es dable acceder a dicha prestación de acuerdo a los lineamientos previstos en el Decreto 758 de 1990, veamos porqué:

En primer lugar, no es objeto de discusión que únicamente en virtud de la edad, a la señora ADRIANA ALZÁTE le es aplicable el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que tenía más de 35 años al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del régimen pensional para el sector privado, lo cual le permite que para el reconocimiento de vejez se tengan en cuenta las condiciones de edad, tiempo y monto del Decreto 758 de 1990, que exige acreditar 55 años de edad, en el caso de las mujeres y 1000 semanas en cualquier época o 500 cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida.

En éste orden de ideas, antes de realizar el análisis que ahora nos ocupa, es importante tener en cuenta la reforma que realizó el CONGRESO DE LA REPÚBLICA cuando expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Nacional y limitó el régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993, restringiendo su aplicación hasta el 31 de julio de 2010, salvo para quienes a su entrada en vigencia tuvieran más de 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, con el fin de proteger su expectativa legítima, a los cuales se les mantendría hasta el año 2014.

Valga aclarar en éste punto, que en el caso puesto a consideración de la Sala, tal modificación constitucional varió las condiciones para efectos de establecer que normativa se aplicaría a la afiliada, toda vez que cumplió 55 años con posterioridad al 31 de julio de 2010, concretamente el 30 de enero de 2013 dado que nació el mismo día y mes del año 1958, hecho acreditado con el correspondiente Registro Civil de Nacimiento que obra a folio 38 del plenario, fecha que en todo caso no controvierten las demandadas.

Ahora, en la Historia Laboral expedida por Colpensiones consta que la demandante **cotizó al otrora ISS** entre el 16 de agosto de 1985, primer pago realizado al sistema, y el 31 de marzo del año 2000 un total de **632,29** semanas (fl. 240), y en el historial emitido por Porvenir S.A. (fl. 50), se evidencia que aquella realizó aportes a dicha entidad a partir del ciclo siguiente, es decir, abril del 2000, alcanzando a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 un total de **265,57** semanas cotizadas al RAIS, que sumadas con las antes mencionadas, exceden las 750 semanas que exigió la norma al alcanzar 897,86, hecho que le permite ostentar la calidad de beneficiaria del régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, data para la cual contaba

con 56 años y más de 1000 semanas, toda vez que a la densidad acreditada en el régimen de prima media, deben sumárseles las **801,14** cotizadas al RAIS (fls. 50 a 54 y 172) hasta el 31 de diciembre de 2015, último aporte efectuado al sistema, completando un total de 1.433,43 semanas cotizadas en toda su vida laboral, siendo dable concluir que **causó la pensión de vejez, conforme lo previsto en el Decreto 758 de 1990, el 30 de enero de 2013, cuando cumplió la edad**, último de los requisitos satisfechos.

En cuanto al **DISFRUTE**, se ha considerado que éste se da cuando una vez reunidos los requisitos, el afiliado solicita a la entidad administradora de pensiones el reconocimiento de la misma y se ha dado el retiro o desafiliación del sistema general de pensiones, pues para la liquidación de la prestación se debe tener en cuenta hasta la última semana cotizada, ya que mal haría en reconocerse un retroactivo sobre unas semanas que efectivamente sirvieron de base para el cálculo de la prestación.

Así las cosas, basta con verificar la desafiliación o retiro del sistema, hecho que no sólo se prueba con el reporte expreso de la novedad de retiro, sino que también en algunos casos donde el afiliado deja de cotizar pero omite reportar formalmente su retiro, el hecho del que inequívocamente se infiere la voluntad de desafiliarse es la presentación de la reclamación tendiente al reconocimiento de la pensión, lo que constituye una manifestación indiscutible de la voluntad de cesar el pago de sus cotizaciones para empezar a disfrutar de la pensión.

Así las cosas, acudimos a la información que se desprende en la Historia Laboral expedida por Porvenir en marzo de 2017 (fls. 162 a 172), en la que se aprecian cotizaciones hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, con posterioridad a la causación de la prestación, situación que a juicio de esta Sala, le permite a la demandante **entrar a disfrutar de la prestación por vejez a partir del 1 de enero de 2016**, punto en el que erró la falladora, toda vez que aquella basó sus cálculos en el historial allegado con la demanda, impreso en noviembre de 2015, razón por la que únicamente se registraban cotizaciones hasta octubre de tal anualidad, punto en el que habrá de modificarse la decisión adoptada en primera instancia, en este aspecto consultada, grado jurisdiccional que únicamente se surte en favor de Colpensiones.

Ahora, no desconoce la Sala los interesantes argumentos de la parte actora plasmados en el recurso de alzada, concretamente en lo relacionado a la procedencia del retroactivo pensional, al sostener que la señora Adriana Lucía Álzate, al cumplimiento de los 55 años, NO contó con opción diferente a la de continuar cotizando configurándose una inducción en error. Empero, esta Magistratura no comparte dichos planteamientos como a continuación se pasa a exponer.

Conocedora es la Sala de la tesis según la cual nuestro órgano de cierre ha reconocido el derecho a disfrutar de la pensión desde el momento en que se causa la misma pese a que con posterioridad el afiliado haya continuado realizando aportes al régimen pensional, pero únicamente cuando se demuestra que dichas cotizaciones lo fueron por la errada información suministrada por parte de la entidad administradora. Entre dichos pronunciamientos encontramos las sentencias 37.798, 39.206 y 63.823 de 2018, además de las de radicación 34.514, 39.391 y 42.289.

En el último de los antecedentes jurisprudenciales citados, nuestro órgano de cierre señaló que.

la ley de seguridad social establece como necesaria la desafiliación del sistema para que proceda el pago de la pensión de vejez, y así mismo recordó que se debe estudiar las particularidades de cada caso, pues su aplicación ha de ajustarse a las especiales circunstancias que emergen de la situación pensional del afiliado, además que no es posible hacer responsable al asegurado de los errores de la administradora de pensiones, quien como en esta oportunidad acontece debió reconocer el derecho en su oportunidad, por estar ya satisfechos la totalidad de los requisitos exigidos por los reglamentos del ISS.

En éste caso, lo expuesto en dichas providencias solo estaría llamado a materializarse a partir de la fecha de notificación de la Resolución a través de la cual Colpensiones negase la prestación a la actora aduciendo que su densidad era insuficiente para acceder a una pensión de vejez, pues con antelación a ese día la accionante habría realizado válidamente aportes al régimen pensional sin haber sido notificada de ninguna negativa.

Ahora, aunque la demandante elevó ante Colpensiones una petición en dicho sentido, tal entidad realmente NO tenía competencia para pronunciarse de fondo, salvo que su retorno al régimen de prima media lo fuera por tener 750 semanas al 1 de abril de 1994, pero sólo contaba con 393 (fl. 237), de ahí que la administradora NO contase con opción diferente a la de oponerse a un traslado administrativo como en efecto ocurrió a través de la misiva fechada el 29 de febrero de 2016 (fl. 37), consecuentemente no le era dable ni siquiera examinar la procedencia de una pensión, mucho menos le indicó a la asegurada que su densidad era insuficiente o que debía continuar cotizando.

Y aunque tal razonamiento NO fuese de recibo o no complaciese a la parte actora, habría de destacarse entonces que dicha reclamación fue radicada en Colpensiones el 24 de febrero de 2016 (fl. 32), fecha para la cual la actora ya había cesado los aportes al régimen pensional, por lo que una eventual negativa ninguna incidencia habría tenido en las semanas que cotizó desde el cumplimiento de la edad en enero de 2013, hasta el 31 de diciembre de 2015.

Ahora, otra cosa es que Porvenir, a través de comunicado del 16 de abril de 2015, en respuesta a la solicitud elevada el 2 de febrero de tal anualidad (fls. 56 y 60) hubiese informado a la señora Adriana Lucia la improcedencia del reconocimiento de la pensión de vejez, de un lado, porque no contaba con el capital suficiente para financiar tal prestación, y de otro, por recibir ingresos superiores al SMLMV que le impedían acceder a la garantía de pensión mínima.

Ahora, menciona el apoderado de la demandante en los alegatos sustentados ante esta instancia, entre otras cosas, que dicha negativa era *arbitraria*. Empero, habrá de recordársele en este punto, que para la época regía el art. 84 de la Ley 100 de 1993, derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, cuyo tenor era:

Cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que le correspondería como pensión mínima, no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima.

Quiere ello decir que ciertamente no era infundada la negativa, pues no sólo el salario percibido, \$670.000 (superior a \$644.360 que era el mínimo de la época), sino además la pensión de sobrevivientes que recibía de Positiva S.A. por valor de \$789.434 (fl. 58 – colilla nómina de pensionados), le impedían acceder a dicha garantía.

En todo caso, en uno u otro sentido, ninguna de las entidades forzó a la demandante, tras el cumplimiento de los 55 años en enero de 2013, a continuar cotizando al sistema pensional, incluso la misiva de Porvenir data del 2015, aspecto que es el que precisamente ha examinado la Corte en la teoría conocida como inducción en error, al castigar al fondo, por denominarlo de alguna manera, obligándolo a reconocer un retroactivo, cuando causado un derecho, se constriñe a la parte a continuar cotizando.

Bien pudo la actora cesar los aportes al régimen pensional si lo que quería era disfrutar de la prestación, pero ello NO ocurrió oportunamente, probablemente ni siquiera lo sabía, especialmente de cara a un régimen en el que ello no importaba, o bien podía continuar realizando cotizaciones con el fin de contribuir al mejoramiento de la mesada en consideración a los IBC que venía reportando o aumentar el capital de su cuenta de ahorro individual. También era dable continuar laborando y reportar las novedades correspondientes al sistema, dado que la PILA permite que la persona, precisamente para no afectar el retroactivo, cese las cotizaciones al régimen pensional aunque perviva un vínculo, pagándose únicamente los aportes para cubrir otras contingencias, como salud y riesgos laborales.

De ahí que no tenga operatividad, para el caso que nos ocupa, la tesis de la inducción en error para acceder a la prestación desde el cumplimiento de la edad y en consecuencia, el disfrute lo sea desde el día siguiente al último aporte efectuado al régimen pensional,

Ahora, si lo que realmente la parte actora pretende con el recurso de alzada es una indemnización de perjuicios a cargo de Porvenir S.A. teniéndose en cuenta que por lo menos para abril de 2015, cuando tal entidad le notificó la negativa, aquella optó por continuar cotizando y que a partir de tal momento sí podría hablarse de una eventual inducción en error, bastaría con señalar que ello no comportó objeto de súplica en el líbelo genitor, no pudiendo alterarse intrínsecamente la fijación de litigio con el recurso de alzada, y en todo caso, en esta instancia el operador jurídico NO cuenta con las facultades *extra* y *ultra petita* de las que si goza el juez en primera instancia, de ahí que nos encontraríamos atados para imponer algún tipo de condena en tal sentido.

Nótese además como en el recurso de apelación la parte actora reconoce que la inducción en error proviene de Porvenir S.A., pero pretende que las consecuencias de ello se impongan a un tercero como lo es Colpensiones, únicamente teniendo vocación de prosperidad tal súplica si dicha inducción en error, proviniera de esta última administradora y no de otra.

Reconoce la Sala que esta es una situación muy particular, con características diferenciadoras del común de los casos, empero nos encontramos ante una limitante cual es la imposibilidad de sancionar, pues ello sería lo que ocurriría, al imponer a Colpensiones el pago de un retroactivo por la respuesta de Porvenir, que por demás, por lo menos para ese momento histórico, se ajustó a derecho; otra cosa es que producto de la declaratoria de ineficacia tardía, la demandante haya visto truncado su derecho a disfrutar de una prestación a los 55 años, y en gracia de discusión, aunque se menciona que en tal data la administradora del RAIS le indicó que debía continuar cotizando hasta los 57, lo cierto es que NO reposa en el plenario prueba de ello.

Aunado a lo anterior, habrá de señalarse que, en parte alguna, se acreditó que la administradora del RAIS hubiese brindado una errada información a la actora al momento de afiliarse, siendo carga de quien aduce la existencia de un perjuicio, demostrar no sólo su existencia, sino que el mismo está ligado a tal actuar, es decir, ese nexo de causalidad, pues aunque podría asimilarse el daño a la ausencia del retroactivo, ello no releva a la actora de la actividad probatoria que en tal sentido debió desplegar.

Y es que la ineficacia aquí declarada, no deviene de tal hecho, es decir, del actuar negligente de la entidad, ni de que se hubiese configurado un error de hecho en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa como vicio en el consentimiento, sino por el contrario, tal ineficacia nace de la omisión de la AFP en cuanto a no cumplir la carga de la prueba que el precedente judicial ha radicado en cabeza suya, es decir, se cimenta en el hecho de que el fondo no demostró la calidad de la asesoría que en su momento brindó a la actora.

Así las cosas, si se desconocen los pormenores de la misma, no puede tildarse de indebida o irregular, por lo que el eventual perjuicio que se alega, no puede indefectiblemente desprenderse de tal asesoría en la que la demandante decidió trasladarse de régimen, asesoría cuyo contenido integral se desconoce, pues lo dicho por la actora en el interrogatorio de parte absuelto, tiene como finalidad provocar una confesión, no acreditar un hecho.

Aunado a ello, aunque tal tesis no fuera de recibo, a igual conclusión se llegaría dado que NO es un constreñimiento lo que detonó la existencia de cotizaciones más allá de la fecha de disfrute, sino más bien el desconocimiento de la ley, ignorancia que NO se puede cimentar en la supuesta ausencia de una asesoría correcta, completa, clara y veraz por parte de la administradora del RAIS al momento del traslado toda vez que ese deber de buen consejo al que alude la jurisprudencia se enmarca en la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales. De esta manera, aun partiendo de que nada de ello se hubiese indicado en esa asesoría inicial, no implicaría inexorablemente la acreditación de un daño en cuanto a la pérdida del retroactivo, pues NO se espera que en dicha asesoría se haga un estudio exhaustivo, pormenorizado, detallado o puntual de cada régimen, se hablan de generalidades, ello teniendo en cuenta que es un tema complejo y amplio. En otras palabras, la ineficacia NO deviene del hecho de que PORVENIR no hubiese explicado a la demandante que la causación y disfrute son dos momentos disímiles en la pensión de vejez que se otorga en el régimen de prima media.

De avalar tal tesis, le bastaría a cualquier persona con decir que no sabía que para disfrutar de la pensión debía cesar los aportes al régimen pensional, endilgar la culpa de su ignorancia a la administradora, y acceder automáticamente a su pago, lo que obviamente escapa a la real intelección del art. 13 del Decreto 758 de 1990, al margen que el desconocimiento de la ley no es excusa para incumplirla.

Por las razones expuestas, no encontrara eco en esta instancia tal petición, aunque NO se mantendrá incólume en este aspecto la decisión de la a quo, dado que, como se dijo, aquella desconoció aportes posteriores dado que el último ciclo cotizado por la demandante no fue octubre de 2015 sino diciembre de tal anualidad, razón por la que la pensión habrá de reconocerse desde el 1 de enero de 2016, modificándose en este aspecto la sentencia emitida.

Antes de efectuar los cálculos de rigor, atendiendo otro de los puntos cuestionados por la demandante, y en cumplimiento de lo normado por el art. 20 del Decreto 758 de 1990, que para el caso avala la aplicación de una tasa de remplazo del 90%, y el art. 21 de la Ley 100 de 1993, se procede a revisar el IBL con el promedio de las cotizaciones efectivamente realizadas durante toda la vida laboral, que según la a quo le es más favorable, punto con el que guarda coincidencia la reclamante. Encontrando que:

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
16-ago-85	31-ago-85	\$ 17.790	16	\$ 799.811	\$ 1.266	2015	88,05	1984	1,96
01-sep-85	30-sep-85	\$ 25.530	30	\$ 1.147.790	\$ 3.407	2015	88,05	1984	1,96
01-oct-85	31-oct-85	\$ 25.530	31	\$ 1.147.790	\$ 3.520	2015	88,05	1984	1,96
01-nov-85	30-nov-85	\$ 25.530	30	\$ 1.147.790	\$ 3.407	2015	88,05	1984	1,96
01-dic-85	31-dic-85	\$ 25.530	31	\$ 1.147.790	\$ 3.520	2015	88,05	1984	1,96
01-ene-86	31-ene-86	\$ 39.310	31	\$ 1.443.255	\$ 4.427	2015	88,05	1985	2,40
01-feb-86	28-feb-86	\$ 39.310	28	\$ 1.443.255	\$ 3.998	2015	88,05	1985	2,40
01-mar-86	31-mar-86	\$ 39.310	31	\$ 1.443.255	\$ 4.427	2015	88,05	1985	2,40
01-abr-86	30-abr-86	\$ 39.310	30	\$ 1.443.255	\$ 4.284	2015	88,05	1985	2,40
01-may-86	31-may-86	\$ 39.310	31	\$ 1.443.255	\$ 4.427	2015	88,05	1985	2,40
01-jun-86	30-jun-86	\$ 39.310	30	\$ 1.443.255	\$ 4.284	2015	88,05	1985	2,40
01-jul-86	31-jul-86	\$ 39.310	31	\$ 1.443.255	\$ 4.427	2015	88,05	1985	2,40
01-ago-86	31-ago-86	\$ 39.310	31	\$ 1.443.255	\$ 4.427	2015	88,05	1985	2,40
01-sep-86	30-sep-86	\$ 39.310	30	\$ 1.443.255	\$ 4.284	2015	88,05	1985	2,40
01-oct-86	31-oct-86	\$ 39.310	31	\$ 1.443.255	\$ 4.427	2015	88,05	1985	2,40
01-nov-86	30-nov-86	\$ 39.310	30	\$ 1.443.255	\$ 4.284	2015	88,05	1985	2,40
01-dic-86	31-dic-86	\$ 39.310	21	\$ 1.443.255	\$ 2.999	2015	88,05	1985	2,40
01-ene-87	31-ene-87	\$ 39.310	4	\$ 1.193.115	\$ 472	2015	88,05	1986	2,90
01-feb-87	28-feb-87	\$ 41.040	28	\$ 1.245.623	\$ 3.451	2015	88,05	1986	2,90
01-mar-87	31-mar-87	\$ 41.040	7	\$ 1.245.623	\$ 863	2015	88,05	1986	2,90
01-abr-87	30-abr-87	\$ 41.040	30	\$ 1.245.623	\$ 3.697	2015	88,05	1986	2,90
01-may-87	31-may-87	\$ 41.040	31	\$ 1.245.623	\$ 3.821	2015	88,05	1986	2,90
01-jun-87	30-jun-87	\$ 41.040	30	\$ 1.245.623	\$ 3.697	2015	88,05	1986	2,90
01-jul-87	31-jul-87	\$ 41.040	31	\$ 1.245.623	\$ 3.821	2015	88,05	1986	2,90
01-ago-87	31-ago-87	\$ 41.040	31	\$ 1.245.623	\$ 3.821	2015	88,05	1986	2,90
01-sep-87	30-sep-87	\$ 41.040	30	\$ 1.245.623	\$ 3.697	2015	88,05	1986	2,90
01-oct-87	31-oct-87	\$ 41.040	31	\$ 1.245.623	\$ 3.821	2015	88,05	1986	2,90
01-nov-87	30-nov-87	\$ 41.040	30	\$ 1.245.623	\$ 3.697	2015	88,05	1986	2,90
01-dic-87	31-dic-87	\$ 41.040	9	\$ 1.245.623	\$ 1.109	2015	88,05	1986	2,90
01-ene-88	31-ene-88					2015	88,05	1987	3,60
01-feb-88	29-feb-88	\$ 41.040	13	\$ 1.004.421	\$ 1.292	2015	88,05	1987	3,60

01-mar-88	31-mar-88	\$ 41.040	31	\$ 1.004.421	\$ 3.081	2015	88,05	1987	3,60
01-abr-88	30-abr-88	\$ 41.040	30	\$ 1.004.421	\$ 2.981	2015	88,05	1987	3,60
01-may-88	31-may-88	\$ 41.040	31	\$ 1.004.421	\$ 3.081	2015	88,05	1987	3,60
01-jun-88	30-jun-88	\$ 41.040	15	\$ 1.004.421	\$ 1.491	2015	88,05	1987	3,60
01-jul-88	31-jul-88	\$ 47.370	26	\$ 1.159.343	\$ 2.982	2015	88,05	1987	3,60
01-ago-88	31-ago-88	\$ 47.370	31	\$ 1.159.343	\$ 3.556	2015	88,05	1987	3,60
01-sep-88	30-sep-88	\$ 47.370	30	\$ 1.159.343	\$ 3.441	2015	88,05	1987	3,60
01-oct-88	31-oct-88	\$ 47.370	31	\$ 1.159.343	\$ 3.556	2015	88,05	1987	3,60
01-nov-88	30-nov-88	\$ 47.370	30	\$ 1.159.343	\$ 3.441	2015	88,05	1987	3,60
01-dic-88	31-dic-88	\$ 47.370	31	\$ 1.159.343	\$ 3.556	2015	88,05	1987	3,60
01-ene-89	31-ene-89	\$ 47.370	31	\$ 904.895	\$ 2.775	2015	88,05	1988	4,61
01-feb-89	28-feb-89	\$ 54.630	28	\$ 1.043.581	\$ 2.891	2015	88,05	1988	4,61
01-mar-89	31-mar-89	\$ 54.630	31	\$ 1.043.581	\$ 3.201	2015	88,05	1988	4,61
01-abr-89	30-abr-89	\$ 54.630	30	\$ 1.043.581	\$ 3.098	2015	88,05	1988	4,61
01-may-89	31-may-89	\$ 54.630	31	\$ 1.043.581	\$ 3.201	2015	88,05	1988	4,61
01-jun-89	30-jun-89	\$ 54.630	30	\$ 1.043.581	\$ 3.098	2015	88,05	1988	4,61
01-jul-89	31-jul-89	\$ 54.630	31	\$ 1.043.581	\$ 3.201	2015	88,05	1988	4,61
01-ago-89	31-ago-89	\$ 54.630	31	\$ 1.043.581	\$ 3.201	2015	88,05	1988	4,61
01-sep-89	30-sep-89	\$ 54.630	30	\$ 1.043.581	\$ 3.098	2015	88,05	1988	4,61
01-oct-89	31-oct-89	\$ 54.630	31	\$ 1.043.581	\$ 3.201	2015	88,05	1988	4,61
01-nov-89	30-nov-89	\$ 54.630	30	\$ 1.043.581	\$ 3.098	2015	88,05	1988	4,61
01-dic-89	31-dic-89	\$ 54.630	31	\$ 1.043.581	\$ 3.201	2015	88,05	1988	4,61
01-ene-90	31-ene-90	\$ 54.630	31	\$ 827.824	\$ 2.539	2015	88,05	1989	5,81
01-feb-90	28-feb-90	\$ 61.950	28	\$ 938.746	\$ 2.601	2015	88,05	1989	5,81
01-mar-90	31-mar-90	\$ 61.950	31	\$ 938.746	\$ 2.879	2015	88,05	1989	5,81
01-abr-90	30-abr-90	\$ 61.950	30	\$ 938.746	\$ 2.786	2015	88,05	1989	5,81
01-may-90	31-may-90	\$ 61.950	31	\$ 938.746	\$ 2.879	2015	88,05	1989	5,81
01-jun-90	30-jun-90	\$ 61.950	30	\$ 938.746	\$ 2.786	2015	88,05	1989	5,81
01-jul-90	31-jul-90	\$ 61.950	31	\$ 938.746	\$ 2.879	2015	88,05	1989	5,81
01-ago-90	31-ago-90	\$ 61.950	31	\$ 938.746	\$ 2.879	2015	88,05	1989	5,81
01-sep-90	30-sep-90	\$ 61.950	30	\$ 938.746	\$ 2.786	2015	88,05	1989	5,81
01-oct-90	31-oct-90	\$ 61.950	31	\$ 938.746	\$ 2.879	2015	88,05	1989	5,81
01-nov-90	30-nov-90	\$ 61.950	30	\$ 938.746	\$ 2.786	2015	88,05	1989	5,81
01-dic-90	31-dic-90	\$ 61.950	31	\$ 938.746	\$ 2.879	2015	88,05	1989	5,81
01-ene-91	31-ene-91	\$ 79.290	31	\$ 908.301	\$ 2.786	2015	88,05	1990	7,69
01-feb-91	28-feb-91	\$ 79.290	28	\$ 908.301	\$ 2.516	2015	88,05	1990	7,69
01-mar-91	31-mar-91	\$ 79.290	31	\$ 908.301	\$ 2.786	2015	88,05	1990	7,69
01-abr-91	30-abr-91	\$ 79.290	30	\$ 908.301	\$ 2.696	2015	88,05	1990	7,69
01-may-91	31-may-91	\$ 79.290	31	\$ 908.301	\$ 2.786	2015	88,05	1990	7,69
01-jun-91	30-jun-91	\$ 79.290	30	\$ 908.301	\$ 2.696	2015	88,05	1990	7,69
01-jul-91	31-jul-91	\$ 79.290	31	\$ 908.301	\$ 2.786	2015	88,05	1990	7,69
01-ago-91	31-ago-91	\$ 79.290	31	\$ 908.301	\$ 2.786	2015	88,05	1990	7,69
01-sep-91	30-sep-91	\$ 79.290	5	\$ 908.301	\$ 449	2015	88,05	1990	7,69
01-oct-91	31-oct-91					2015	88,05	1990	7,69
01-nov-91	30-nov-91					2015	88,05	1990	7,69
01-dic-91	31-dic-91	\$ 54.630	22	\$ 625.810	\$ 1.362	2015	88,05	1990	7,69
01-ene-92	31-ene-92					2015	88,05	1991	9,74
01-feb-92	29-feb-92					2015	88,05	1991	9,74
01-mar-92	31-mar-92	\$ 99.630	7	\$ 900.365	\$ 624	2015	88,05	1991	9,74
01-abr-92	30-abr-92	\$ 99.630	27	\$ 900.365	\$ 2.405	2015	88,05	1991	9,74
01-may-92	31-may-92	\$ 99.630	22	\$ 900.365	\$ 1.960	2015	88,05	1991	9,74
01-jun-92	30-jun-92	\$ 70.260	8	\$ 634.945	\$ 503	2015	88,05	1991	9,74
01-jul-92	31-jul-92	\$ 70.260	27	\$ 634.945	\$ 1.696	2015	88,05	1991	9,74

01-ago-92	31-ago-92	\$ 70.260	14	\$ 634.945	\$ 880	2015	88,05	1991	9,74
01-sep-92	30-sep-92	\$ 70.260	30	\$ 634.945	\$ 1.885	2015	88,05	1991	9,74
01-oct-92	31-oct-92	\$ 70.260	18	\$ 634.945	\$ 1.131	2015	88,05	1991	9,74
01-nov-92	30-nov-92	\$ 70.260	30	\$ 634.945	\$ 1.885	2015	88,05	1991	9,74
01-dic-92	31-dic-92	\$ 70.260	31	\$ 634.945	\$ 1.947	2015	88,05	1991	9,74
01-ene-93	31-ene-93	\$ 106.749	31	\$ 771.390	\$ 2.366	2015	88,05	1992	12,19
01-feb-93	28-feb-93	\$ 111.000	28	\$ 802.109	\$ 2.222	2015	88,05	1992	12,19
01-mar-93	31-mar-93	\$ 111.000	31	\$ 802.109	\$ 2.460	2015	88,05	1992	12,19
01-abr-93	30-abr-93	\$ 111.000	30	\$ 802.109	\$ 2.381	2015	88,05	1992	12,19
01-may-93	31-may-93	\$ 111.000	31	\$ 802.109	\$ 2.460	2015	88,05	1992	12,19
01-jun-93	30-jun-93	\$ 123.210	30	\$ 890.341	\$ 2.643	2015	88,05	1992	12,19
01-jul-93	31-jul-93	\$ 123.210	31	\$ 890.341	\$ 2.731	2015	88,05	1992	12,19
01-ago-93	31-ago-93	\$ 123.210	31	\$ 890.341	\$ 2.731	2015	88,05	1992	12,19
01-sep-93	30-sep-93	\$ 123.210	30	\$ 890.341	\$ 2.643	2015	88,05	1992	12,19
01-oct-93	31-oct-93	\$ 123.210	31	\$ 890.341	\$ 2.731	2015	88,05	1992	12,19
01-nov-93	30-nov-93	\$ 123.210	30	\$ 890.341	\$ 2.643	2015	88,05	1992	12,19
01-dic-93	31-dic-93	\$ 123.210	31	\$ 890.341	\$ 2.731	2015	88,05	1992	12,19
01-ene-94	31-ene-94	\$ 123.210	31	\$ 726.657	\$ 2.229	2015	88,05	1993	14,93
01-feb-94	28-feb-94	\$ 142.800	28	\$ 842.193	\$ 2.333	2015	88,05	1993	14,93
01-mar-94	31-mar-94	\$ 142.800	31	\$ 842.193	\$ 2.583	2015	88,05	1993	14,93
01-abr-94	30-abr-94	\$ 142.800	30	\$ 842.193	\$ 2.500	2015	88,05	1993	14,93
01-may-94	31-may-94	\$ 142.800	31	\$ 842.193	\$ 2.583	2015	88,05	1993	14,93
01-jun-94	30-jun-94	\$ 142.800	30	\$ 842.193	\$ 2.500	2015	88,05	1993	14,93
01-jul-94	31-jul-94	\$ 147.405	31	\$ 869.352	\$ 2.666	2015	88,05	1993	14,93
01-ago-94	31-ago-94	\$ 142.800	31	\$ 842.193	\$ 2.583	2015	88,05	1993	14,93
01-sep-94	30-sep-94	\$ 142.800	30	\$ 842.193	\$ 2.500	2015	88,05	1993	14,93
01-oct-94	31-oct-94	\$ 142.800	31	\$ 842.193	\$ 2.583	2015	88,05	1993	14,93
01-nov-94	30-nov-94	\$ 142.800	30	\$ 842.193	\$ 2.500	2015	88,05	1993	14,93
01-dic-94	31-dic-94	\$ 142.800	31	\$ 842.193	\$ 2.583	2015	88,05	1993	14,93
01-ene-95	31-ene-95	\$ 146.147	30	\$ 703.507	\$ 2.088	2015	88,05	1994	18,29
01-feb-95	28-feb-95	\$ 201.197	30	\$ 968.501	\$ 2.875	2015	88,05	1994	18,29
01-mar-95	31-mar-95	\$ 172.800	30	\$ 831.806	\$ 2.469	2015	88,05	1994	18,29
01-abr-95	30-abr-95	\$ 172.800	30	\$ 831.806	\$ 2.469	2015	88,05	1994	18,29
01-may-95	31-may-95	\$ 172.800	30	\$ 831.806	\$ 2.469	2015	88,05	1994	18,29
01-jun-95	30-jun-95	\$ 172.800	30	\$ 831.806	\$ 2.469	2015	88,05	1994	18,29
01-jul-95	31-jul-95	\$ 172.800	30	\$ 831.806	\$ 2.469	2015	88,05	1994	18,29
01-ago-95	31-ago-95	\$ 172.800	30	\$ 831.806	\$ 2.469	2015	88,05	1994	18,29
01-sep-95	30-sep-95	\$ 172.800	30	\$ 831.806	\$ 2.469	2015	88,05	1994	18,29
01-oct-95	31-oct-95	\$ 187.200	30	\$ 901.123	\$ 2.675	2015	88,05	1994	18,29
01-nov-95	30-nov-95	\$ 181.800	30	\$ 875.129	\$ 2.598	2015	88,05	1994	18,29
01-dic-95	31-dic-95	\$ 172.800	30	\$ 831.806	\$ 2.469	2015	88,05	1994	18,29
01-ene-96	31-ene-96	\$ 206.400	30	\$ 832.335	\$ 2.471	2015	88,05	1995	21,83
01-feb-96	29-feb-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-mar-96	31-mar-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-abr-96	30-abr-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-may-96	31-may-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-jun-96	30-jun-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-jul-96	31-jul-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-ago-96	31-ago-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-sep-96	30-sep-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-oct-96	31-oct-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-nov-96	30-nov-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83
01-dic-96	31-dic-96	\$ 220.800	30	\$ 890.405	\$ 2.643	2015	88,05	1995	21,83

01-ene-97	31-ene-97	\$ 220.800	30	\$ 732.328	\$ 2.174	2015	88,05	1996	26,55
01-feb-97	28-feb-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-mar-97	31-mar-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-abr-97	30-abr-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-may-97	31-may-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-jun-97	30-jun-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-jul-97	31-jul-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-ago-97	31-ago-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-sep-97	30-sep-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-oct-97	31-oct-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-nov-97	30-nov-97	\$ 267.120	30	\$ 885.957	\$ 2.630	2015	88,05	1996	26,55
01-dic-97	31-dic-97	\$ 178.080	9	\$ 590.638	\$ 526	2015	88,05	1996	26,55
01-ene-98	31-ene-98	\$ 160.272	18	\$ 451.952	\$ 805	2015	88,05	1997	31,23
01-feb-98	28-feb-98	\$ 312.530	30	\$ 881.305	\$ 2.616	2015	88,05	1997	31,23
01-mar-98	31-mar-98	\$ 312.530	30	\$ 881.305	\$ 2.616	2015	88,05	1997	31,23
01-abr-98	30-abr-98					2015	88,05	1997	31,23
01-may-98	31-may-98					2015	88,05	1997	31,23
01-jun-98	30-jun-98					2015	88,05	1997	31,23
01-jul-98	31-jul-98					2015	88,05	1997	31,23
01-ago-98	31-ago-98					2015	88,05	1997	31,23
01-sep-98	30-sep-98	\$ 6.800	30	\$ 19.175	\$ 57	2015	88,05	1997	31,23
01-oct-98	31-oct-98	\$ 208.782	30	\$ 588.746	\$ 1.748	2015	88,05	1997	31,23
01-nov-98	30-nov-98	\$ 207.985	30	\$ 586.498	\$ 1.741	2015	88,05	1997	31,23
01-dic-98	31-dic-98	\$ 159.375	23	\$ 449.423	\$ 1.023	2015	88,05	1997	31,23
01-ene-99	31-ene-99					2015	88,05	1998	36,42
01-feb-99	28-feb-99					2015	88,05	1998	36,42
01-mar-99	31-mar-99					2015	88,05	1998	36,42
01-abr-99	30-abr-99					2015	88,05	1998	36,42
01-may-99	31-may-99					2015	88,05	1998	36,42
01-jun-99	30-jun-99					2015	88,05	1998	36,42
01-jul-99	31-jul-99	\$ 41.667	5	\$ 100.726	\$ 50	2015	88,05	1998	36,42
01-ago-99	31-ago-99	\$ 250.000	30	\$ 604.349	\$ 1.794	2015	88,05	1998	36,42
01-sep-99	30-sep-99	\$ 250.000	30	\$ 604.349	\$ 1.794	2015	88,05	1998	36,42
01-oct-99	31-oct-99	\$ 250.000	30	\$ 604.349	\$ 1.794	2015	88,05	1998	36,42
01-nov-99	30-nov-99	\$ 250.000	30	\$ 604.349	\$ 1.794	2015	88,05	1998	36,42
01-dic-99	31-dic-99	\$ 250.000	17	\$ 604.349	\$ 1.017	2015	88,05	1998	36,42
01-ene-00	31-ene-00	\$ 164.734	19	\$ 364.571	\$ 685	2015	88,05	1999	39,79
01-feb-00	29-feb-00	\$ 260.106	30	\$ 575.638	\$ 1.709	2015	88,05	1999	39,79
01-mar-00	31-mar-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-abr-00	30-abr-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-may-00	31-may-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-jun-00	30-jun-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-jul-00	31-jul-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-ago-00	31-ago-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-sep-00	30-sep-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-oct-00	31-oct-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-nov-00	30-nov-00	\$ 260.000	30	\$ 575.404	\$ 1.708	2015	88,05	1999	39,79
01-dic-00	31-dic-00	\$ 225.000	26	\$ 497.945	\$ 1.281	2015	88,05	1999	39,79
01-ene-01	31-ene-01	\$ 201.000	21	\$ 409.047	\$ 850	2015	88,05	2000	43,27
01-feb-01	28-feb-01	\$ 292.000	30	\$ 594.237	\$ 1.764	2015	88,05	2000	43,27
01-mar-01	31-mar-01	\$ 305.000	30	\$ 620.693	\$ 1.842	2015	88,05	2000	43,27
01-abr-01	30-abr-01	\$ 305.000	30	\$ 620.693	\$ 1.842	2015	88,05	2000	43,27
01-may-01	31-may-01	\$ 303.000	30	\$ 616.622	\$ 1.830	2015	88,05	2000	43,27

01-jun-01	30-jun-01	\$ 300.000	30	\$ 610.517	\$ 1.812	2015	88,05	2000	43,27
01-jul-01	31-jul-01	\$ 310.000	30	\$ 630.868	\$ 1.873	2015	88,05	2000	43,27
01-ago-01	31-ago-01	\$ 321.000	30	\$ 653.254	\$ 1.939	2015	88,05	2000	43,27
01-sep-01	30-sep-01	\$ 320.000	30	\$ 651.218	\$ 1.933	2015	88,05	2000	43,27
01-oct-01	31-oct-01	\$ 300.000	30	\$ 610.517	\$ 1.812	2015	88,05	2000	43,27
01-nov-01	30-nov-01	\$ 300.000	30	\$ 610.517	\$ 1.812	2015	88,05	2000	43,27
01-dic-01	31-dic-01	\$ 210.000	21	\$ 427.362	\$ 888	2015	88,05	2000	43,27
01-ene-02	31-ene-02	\$ 175.000	17	\$ 330.838	\$ 556	2015	88,05	2001	46,58
01-feb-02	28-feb-02	\$ 309.000	30	\$ 584.166	\$ 1.734	2015	88,05	2001	46,58
01-mar-02	31-mar-02	\$ 309.000	30	\$ 584.166	\$ 1.734	2015	88,05	2001	46,58
01-abr-02	30-abr-02	\$ 309.000	30	\$ 584.166	\$ 1.734	2015	88,05	2001	46,58
01-may-02	31-may-02	\$ 309.000	30	\$ 584.166	\$ 1.734	2015	88,05	2001	46,58
01-jun-02	30-jun-02	\$ 309.000	30	\$ 584.166	\$ 1.734	2015	88,05	2001	46,58
01-jul-02	31-jul-02	\$ 319.000	30	\$ 603.071	\$ 1.790	2015	88,05	2001	46,58
01-ago-02	31-ago-02	\$ 319.000	30	\$ 603.071	\$ 1.790	2015	88,05	2001	46,58
01-sep-02	30-sep-02	\$ 309.000	30	\$ 584.166	\$ 1.734	2015	88,05	2001	46,58
01-oct-02	31-oct-02	\$ 319.000	30	\$ 603.071	\$ 1.790	2015	88,05	2001	46,58
01-nov-02	30-nov-02	\$ 309.000	30	\$ 584.166	\$ 1.734	2015	88,05	2001	46,58
01-dic-02	31-dic-02	\$ 217.000	21	\$ 410.239	\$ 852	2015	88,05	2001	46,58
01-ene-03	31-ene-03	\$ 210.000	18	\$ 371.059	\$ 661	2015	88,05	2002	49,83
01-feb-03	28-feb-03	\$ 332.000	30	\$ 586.626	\$ 1.741	2015	88,05	2002	49,83
01-mar-03	31-mar-03	\$ 332.000	30	\$ 586.626	\$ 1.741	2015	88,05	2002	49,83
01-abr-03	30-abr-03	\$ 332.000	30	\$ 586.626	\$ 1.741	2015	88,05	2002	49,83
01-may-03	31-may-03	\$ 332.000	30	\$ 586.626	\$ 1.741	2015	88,05	2002	49,83
01-jun-03	30-jun-03	\$ 332.000	30	\$ 586.626	\$ 1.741	2015	88,05	2002	49,83
01-jul-03	31-jul-03	\$ 343.000	30	\$ 606.063	\$ 1.799	2015	88,05	2002	49,83
01-ago-03	31-ago-03	\$ 343.000	30	\$ 606.063	\$ 1.799	2015	88,05	2002	49,83
01-sep-03	30-sep-03	\$ 332.000	30	\$ 586.626	\$ 1.741	2015	88,05	2002	49,83
01-oct-03	31-oct-03	\$ 343.000	30	\$ 606.063	\$ 1.799	2015	88,05	2002	49,83
01-nov-03	30-nov-03	\$ 332.000	30	\$ 586.626	\$ 1.741	2015	88,05	2002	49,83
01-dic-03	31-dic-03	\$ 332.000	30	\$ 586.626	\$ 1.741	2015	88,05	2002	49,83
01-ene-04	31-ene-04	\$ 358.000	30	\$ 594.013	\$ 1.763	2015	88,05	2003	53,07
01-feb-04	29-feb-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-mar-04	31-mar-04	\$ 363.967	30	\$ 603.913	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-abr-04	30-abr-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-may-04	31-may-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-jun-04	30-jun-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-jul-04	31-jul-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-ago-04	31-ago-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-sep-04	30-sep-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-oct-04	31-oct-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-nov-04	30-nov-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-dic-04	31-dic-04	\$ 364.000	30	\$ 603.968	\$ 1.793	2015	88,05	2003	53,07
01-ene-05	31-ene-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-feb-05	28-feb-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-mar-05	31-mar-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-abr-05	30-abr-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-may-05	31-may-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-jun-05	30-jun-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-jul-05	31-jul-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-ago-05	31-ago-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-sep-05	30-sep-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-oct-05	31-oct-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98

01-nov-05	30-nov-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-dic-05	31-dic-05	\$ 382.000	30	\$ 600.805	\$ 1.783	2015	88,05	2004	55,98
01-ene-06	31-ene-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-feb-06	28-feb-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-mar-06	31-mar-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-abr-06	30-abr-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-may-06	31-may-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-jun-06	30-jun-06	\$ 327.736	24	\$ 491.592	\$ 1.167	2015	88,05	2005	58,70
01-jul-06	31-jul-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-ago-06	31-ago-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-sep-06	30-sep-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-oct-06	31-oct-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-nov-06	30-nov-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-dic-06	31-dic-06	\$ 408.000	30	\$ 611.986	\$ 1.817	2015	88,05	2005	58,70
01-ene-07	31-ene-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-feb-07	28-feb-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-mar-07	31-mar-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-abr-07	30-abr-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-may-07	31-may-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-jun-07	30-jun-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-jul-07	31-jul-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-ago-07	31-ago-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-sep-07	30-sep-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-oct-07	31-oct-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-nov-07	30-nov-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-dic-07	31-dic-07	\$ 434.000	30	\$ 623.083	\$ 1.849	2015	88,05	2006	61,33
01-ene-08	31-ene-08	\$ 462.000	30	\$ 627.550	\$ 1.863	2015	88,05	2007	64,82
01-feb-08	29-feb-08	\$ 462.000	30	\$ 627.550	\$ 1.863	2015	88,05	2007	64,82
01-mar-08	31-mar-08	\$ 462.000	30	\$ 627.550	\$ 1.863	2015	88,05	2007	64,82
01-abr-08	30-abr-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-may-08	31-may-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-jun-08	30-jun-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-jul-08	31-jul-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-ago-08	31-ago-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-sep-08	30-sep-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-oct-08	31-oct-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-nov-08	30-nov-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-dic-08	31-dic-08	\$ 461.500	30	\$ 626.870	\$ 1.861	2015	88,05	2007	64,82
01-ene-09	31-ene-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-feb-09	28-feb-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-mar-09	31-mar-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-abr-09	30-abr-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-may-09	31-may-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-jun-09	30-jun-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-jul-09	31-jul-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-ago-09	31-ago-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-sep-09	30-sep-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-oct-09	31-oct-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-nov-09	30-nov-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-dic-09	31-dic-09	\$ 497.000	30	\$ 626.972	\$ 1.861	2015	88,05	2008	69,80
01-ene-10	31-ene-10	\$ 515.000	30	\$ 636.930	\$ 1.891	2015	88,05	2009	71,20
01-feb-10	28-feb-10	\$ 515.000	30	\$ 636.930	\$ 1.891	2015	88,05	2009	71,20
01-mar-10	31-mar-10	\$ 515.000	30	\$ 636.930	\$ 1.891	2015	88,05	2009	71,20

01-abr-10	30-abr-10	\$ 515.000	30	\$ 636.930	\$ 1.891	2015	88,05	2009	71,20
01-may-10	31-may-10	\$ 515.000	30	\$ 636.930	\$ 1.891	2015	88,05	2009	71,20
01-jun-10	30-jun-10	\$ 567.000	30	\$ 701.241	\$ 2.081	2015	88,05	2009	71,20
01-jul-10	31-jul-10	\$ 567.000	30	\$ 701.241	\$ 2.081	2015	88,05	2009	71,20
01-ago-10	31-ago-10	\$ 567.000	30	\$ 701.241	\$ 2.081	2015	88,05	2009	71,20
01-sep-10	30-sep-10	\$ 567.000	30	\$ 701.241	\$ 2.081	2015	88,05	2009	71,20
01-oct-10	31-oct-10	\$ 567.000	30	\$ 701.241	\$ 2.081	2015	88,05	2009	71,20
01-nov-10	30-nov-10	\$ 567.000	30	\$ 701.241	\$ 2.081	2015	88,05	2009	71,20
01-dic-10	31-dic-10	\$ 567.000	30	\$ 701.241	\$ 2.081	2015	88,05	2009	71,20
01-ene-11	31-ene-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-feb-11	28-feb-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-mar-11	31-mar-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-abr-11	30-abr-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-may-11	31-may-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-jun-11	30-jun-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-jul-11	31-jul-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-ago-11	31-ago-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-sep-11	30-sep-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-oct-11	31-oct-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-nov-11	30-nov-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-dic-11	31-dic-11	\$ 567.000	30	\$ 679.687	\$ 2.017	2015	88,05	2010	73,45
01-ene-12	31-ene-12	\$ 567.000	30	\$ 655.262	\$ 1.945	2015	88,05	2011	76,19
01-feb-12	29-feb-12	\$ 567.000	30	\$ 655.262	\$ 1.945	2015	88,05	2011	76,19
01-mar-12	31-mar-12	\$ 567.000	30	\$ 655.262	\$ 1.945	2015	88,05	2011	76,19
01-abr-12	30-abr-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-may-12	31-may-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-jun-12	30-jun-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-jul-12	31-jul-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-ago-12	31-ago-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-sep-12	30-sep-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-oct-12	31-oct-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-nov-12	30-nov-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-dic-12	31-dic-12	\$ 600.000	30	\$ 693.399	\$ 2.058	2015	88,05	2011	76,19
01-ene-13	31-ene-13	\$ 600.000	30	\$ 676.914	\$ 2.009	2015	88,05	2012	78,05
01-feb-13	28-feb-13	\$ 600.000	30	\$ 676.914	\$ 2.009	2015	88,05	2012	78,05
01-mar-13	31-mar-13	\$ 600.000	30	\$ 676.914	\$ 2.009	2015	88,05	2012	78,05
01-abr-13	30-abr-13	\$ 600.000	30	\$ 676.914	\$ 2.009	2015	88,05	2012	78,05
01-may-13	31-may-13	\$ 624.000	30	\$ 703.991	\$ 2.090	2015	88,05	2012	78,05
01-jun-13	30-jun-13	\$ 589.500	30	\$ 665.068	\$ 1.974	2015	88,05	2012	78,05
01-jul-13	31-jul-13	\$ 624.000	30	\$ 703.991	\$ 2.090	2015	88,05	2012	78,05
01-ago-13	31-ago-13	\$ 624.000	30	\$ 703.991	\$ 2.090	2015	88,05	2012	78,05
01-sep-13	30-sep-13	\$ 624.000	30	\$ 703.991	\$ 2.090	2015	88,05	2012	78,05
01-oct-13	31-oct-13	\$ 624.000	30	\$ 703.991	\$ 2.090	2015	88,05	2012	78,05
01-nov-13	30-nov-13	\$ 624.000	30	\$ 703.991	\$ 2.090	2015	88,05	2012	78,05
01-dic-13	31-dic-13	\$ 589.500	30	\$ 665.068	\$ 1.974	2015	88,05	2012	78,05
01-ene-14	31-ene-14	\$ 616.000	30	\$ 681.754	\$ 2.024	2015	88,05	2013	79,56
01-feb-14	28-feb-14	\$ 624.000	30	\$ 690.608	\$ 2.050	2015	88,05	2013	79,56
01-mar-14	31-mar-14	\$ 624.000	30	\$ 690.608	\$ 2.050	2015	88,05	2013	79,56
01-abr-14	30-abr-14	\$ 624.000	30	\$ 690.608	\$ 2.050	2015	88,05	2013	79,56
01-may-14	31-may-14	\$ 624.000	30	\$ 690.608	\$ 2.050	2015	88,05	2013	79,56
01-jun-14	30-jun-14	\$ 650.000	30	\$ 719.383	\$ 2.135	2015	88,05	2013	79,56
01-jul-14	31-jul-14	\$ 650.000	30	\$ 719.383	\$ 2.135	2015	88,05	2013	79,56
01-ago-14	31-ago-14	\$ 650.000	30	\$ 719.383	\$ 2.135	2015	88,05	2013	79,56

01-sep-14	30-sep-14	\$ 650.000	30	\$ 719.383	\$ 2.135	2015	88,05	2013	79,56
01-oct-14	31-oct-14	\$ 650.000	30	\$ 719.383	\$ 2.135	2015	88,05	2013	79,56
01-nov-14	30-nov-14	\$ 650.000	30	\$ 719.383	\$ 2.135	2015	88,05	2013	79,56
01-dic-14	31-dic-14	\$ 650.000	30	\$ 719.383	\$ 2.135	2015	88,05	2013	79,56
01-ene-15	31-ene-15	\$ 650.000	30	\$ 693.999	\$ 2.060	2015	88,05	2014	82,47
01-feb-15	28-feb-15	\$ 650.000	30	\$ 693.999	\$ 2.060	2015	88,05	2014	82,47
01-mar-15	31-mar-15	\$ 650.000	30	\$ 693.999	\$ 2.060	2015	88,05	2014	82,47
01-abr-15	30-abr-15	\$ 650.000	30	\$ 693.999	\$ 2.060	2015	88,05	2014	82,47
01-may-15	31-may-15	\$ 650.000	30	\$ 693.999	\$ 2.060	2015	88,05	2014	82,47
01-jun-15	30-jun-15	\$ 670.000	30	\$ 715.353	\$ 2.123	2015	88,05	2014	82,47
01-jul-15	31-jul-15	\$ 670.000	30	\$ 715.353	\$ 2.123	2015	88,05	2014	82,47
01-ago-15	31-ago-15	\$ 670.000	30	\$ 715.353	\$ 2.123	2015	88,05	2014	82,47
01-sep-15	30-sep-15	\$ 670.000	30	\$ 715.353	\$ 2.123	2015	88,05	2014	82,47
01-oct-15	31-oct-15	\$ 670.000	30	\$ 715.353	\$ 2.123	2015	88,05	2014	82,47
01-nov-15	30-nov-15	\$ 670.000	30	\$ 715.353	\$ 2.123	2015	88,05	2014	82,47
01-dic-15	31-dic-15	\$ 670.000	30	\$ 715.353	\$ 2.123	2015	88,05	2014	82,47

TOTAL DIAS	10107
TOTAL SEMANAS	1443,86

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN	\$ 770.372,00
SEMANAS COTIZADAS	1.444
PENSION A RECONOCER	\$ 693.334,80
PORCENTAJE APLICADO	90%

Como puede observarse, existe una diferencia respecto del IBL hallado por la falladora y el aludido por el recurrente, pues según cálculos de este Despacho, al aplicarle al IBL de \$770.372 una tasa de remplazo del 90%, genera una mesada para el 1 de enero de 2016 de \$693.334, ligeramente superior al salario mínimo de esa anualidad correspondiente a \$689.454. Empero, si le aplicásemos el IPC, para el 2017 la mesada correspondería a \$733.201, inferior al mínimo de esa anualidad por \$737.717, siendo este el tope bajo el cual la entidad continuará reconociendo la prestación.

Y es que si bien la parte actora reprocha la cuantificación efectuada por la juez, lo cierto es que no contamos con ningún elemento de contraste para efectos de realizar comparativos y avizorar posibles errores. Ni la falladora allega la hoja de cálculo, tampoco la demandante, contexto bajo el cual NO es dable indicar el porqué de la diferencia en las tasaciones que cada uno defiende. Ahora, ciertamente habría de tener gran incidencia en los cálculos el hecho de que la a quo tomase cotizaciones efectivas hasta octubre de 2015, y por su parte el apoderado de la accionante partiese de la idea que debía liquidarse la prestación a partir del 1 de febrero de 2013, día siguiente al cumplimiento de los 55 años, panorama en el que supondríamos que estaría excluyendo casi dos años de cotizaciones efectivas, lo que notablemente estaría llamado a variar el IBL.

En todo caso, con apego a las atribuciones que en este caso nos da el grado jurisdiccional de consulta surtido a favor de Colpensiones, lo procedente es MODIFICAR el fallo, estipulando como fecha de disfrute el 1 de enero de 2016, adeudándose a la actora al 31 de marzo de 2021, la suma de \$53.016.416, así:

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2016	13	\$ 693.334	\$ 9.013.342
2017	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 828.117	\$ 10.765.521
2021	3	\$ 908.526	\$ 2.725.578
		TOTAL	\$ 53.016.416

A partir del 1 de abril de 2021 Colpensiones continuará reconociendo la prestación en cuantía de un salario mínimo legal vigente para cada anualidad.

De otro lado, se mantendrá la autorización a COLPENSIONES para descontar del retroactivo pensional que pudiera causarse en cumplimiento de esta sentencia, el porcentaje destinado a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, toda vez que conforme al artículo 2 de la Ley 100 de 1993, la solidaridad es un principio general del sistema de seguridad social, entendido este como la práctica de ayuda mutua entre las personas, generaciones y sectores, que no está condicionado a la prestación de un servicio sino a la contribución económica para el fortalecimiento del sistema.

Véase para el efecto lo que sobre el particular razonó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de radicación 54480 y 46234.

Aclarado lo anterior, esta Magistratura procede a examinar el asunto relativo a la procedencia de los **INTERESES MORATORIOS**.

Sabido es que al tenor de lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales. Inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue

morigerando a partir de la sentencia con radicado 44.454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tenga respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

Bajo este contexto, la Sala examinó los diversos pronunciamientos de la entidad, encontrando una razón atendible que avala su postura, dado que la ley e incluso la jurisprudencia han sido claras en establecer las fatales consecuencias que acarrea el traslado, incluso respecto a la pérdida del régimen de transición en aquellos eventos en que la persona no contaba, como ocurre con la actora, con 15 años de servicios o su equivalente en semanas a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, óptica bajo la que, salvo la declaratoria de ineficacia del acto de traslado, no le era dable acceder a la pensión de vejez, y sólo con la prosperidad de esta acción, la demandante logró acceder a tal derecho, análisis que sólo le correspondía efectuar al operador jurídico, no así a Colpensiones por vía administrativa.

En otras palabras: NO se puede endilgar a Colpensiones la eventual tardanza en el reconocimiento de la pensión de vejez.

No se trata pues, como lo interpreta la recurrente, de un castigo para la parte débil de una relación que se enfrenta a una larga espera sin obtener un resarcimiento por ello, toda vez que como nuevamente se reconoce en el recurso de alzada, la tardanza en el pago de la pensión de vejez no devine precisamente de un actuar u omisión de Colpensiones, pagadora de la prestación, sin que pueda ahora, con base en los mismos criterios antes expuestos, analizarse la viabilidad de un *recobro a Porvenir*, como se plantea en el recurso de alzada, lo que en otras palabras implica la imposición de tal condena a la administradora del RAIS, pues ello NO fue solicitado en el líbelo genitor.

Así las cosas, se mantendrá la decisión respecto del reconocimiento de la **INDEXACIÓN** de las sumas adeudadas, atendiendo que efectivamente este dinero no entró ni ha entrado al patrimonio de la demandante y que cuando lo haga, por efectos de inflación, el mismo estará envilecido o desvalorizado. Por ello, la entidad demandada debe indexar el retroactivo de la pensión de vejez adeudado al momento en que proceda a realizar el pago real y efectivo de la obligación, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, entre la fecha de causación de cada mesada y

el momento del pago. Aplicando la siguiente fórmula: *Indexación = índice final/ índice inicial x capital – capital*, como acertadamente lo estimó la a quo.

Finalmente en cuanto a la oposición a la **CONDENA EN COSTAS** que en primera instancia se impuso a PORVENIR y a Colpensiones, resulta pertinente indicar que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 365 del Código General de Proceso, inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, dado que sólo se examinaba si había salido avante la totalidad o no de las pretensiones, sin atender la buena o mala fe de la entidad. Sin embargo, tal posición se ha ido morigerando en casos en los que no ha sido la conducta de la entidad la que origina el conflicto que hoy se pone en conocimiento de esta Sala, máxime cuando la postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento ha dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

De ahí que cualquier negativa de Colpensiones tendiente a negar administrativamente el traslado que judicialmente solicitó la accionante, no resulte caprichoso sino que proviene de la prohibición consagrada en la Ley 797 de 2003 en torno a la imposibilidad de trasladarse entre régimen cuando un afiliado se encuentra a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse.

Tal criterio se ha ido adoptando con ocasión de la expedición de la sentencia con radicado 44.454 del 2 de octubre de 2013, debate que se dio desde la óptica de la improcedencia de los intereses moratorios en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontraran justificadas.

Mutatis mutandis, se ha aplicado dicho criterio PERO UNICAMENTE respecto de las costas procesales que se tasan en primera instancia a cargo de Colpensiones, no así respecto de PORVENIR, pues lo que en este aspecto se analiza no es precisamente la negativa de la respuesta a un derecho de petición, sino los efectos de una afiliación a otro régimen, es el actuar u omisión de la administradora del RAIS el que cimenta la necesidad de un afiliado de activar el aparato judicial en aras de obtener la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico, habiendo salido avante las pretensiones que en tal sentido se incoaron, razón que aunada a las que preceden impiden a esta Magistratura extender a PORVENIR el criterio de exoneración de costas, pues pervive para la misma ese deber de información, cuyo cumplimiento no acreditó.

Así las cosas, se mantendrá la condena en costas en primera instancia pero solamente a cargo de Porvenir, revocándose las impuestas a Colpensiones.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han proferido en torno al tema, modificándola y aclarándola en los aspectos antes aludidos.

Sin costas en esta instancia.

6. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 18 de febrero de 2019 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **ADRIANA LUCÍA ALZATE PINEDA** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.037.371 contra **PORVENIR S.A.** y **COLPENSIONES**.

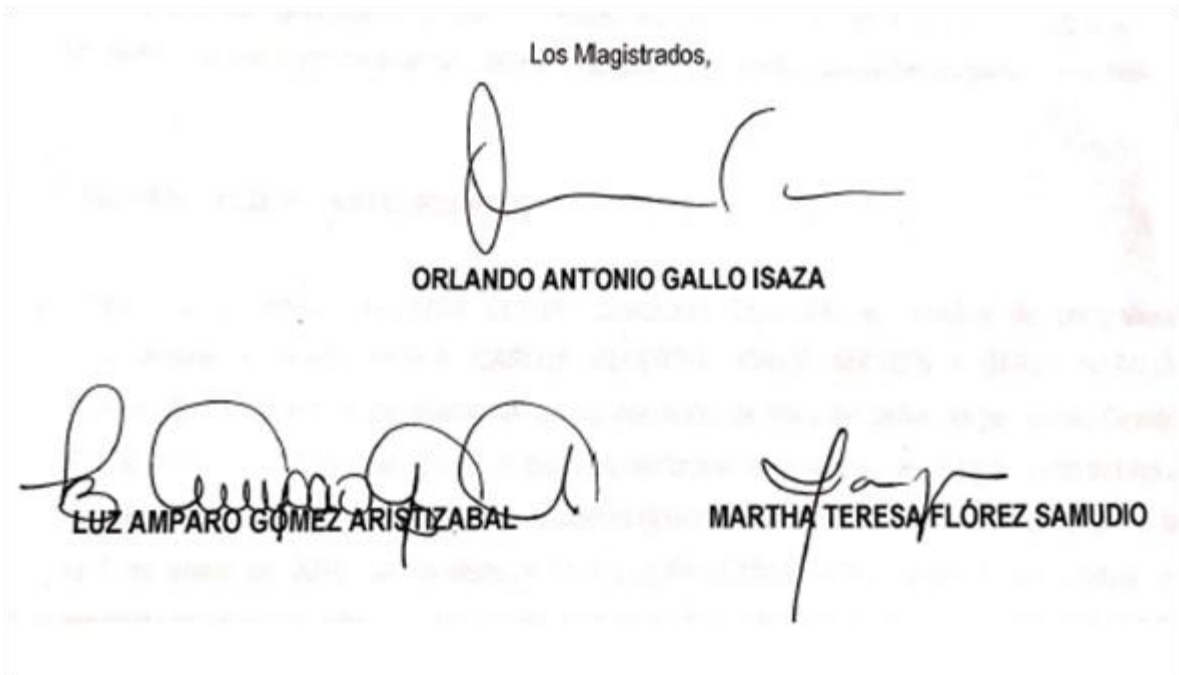
SEGUNDO: se **ACLARA** el numeral segundo del fallo dado que **PORVENIR S.A.** trasladará a **COLPENSIONES** **todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante desde el cambio de régimen**, incluyendo los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: se **MODIFICA** el numeral cuarto del fallo en cuanto a la fecha de disfrute y monto de la prestación, siendo tal el 1 de enero de 2016 en cuantía de un SMLMV, razón por la que Colpensiones adeuda a la demandante la suma de **\$53.016.416**, correspondiente al retroactivo causado hasta el 31 de marzo de 2021, entidad que a partir del 1 de abril de esta anualidad continuará reconociendo la prestación en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, manteniéndose los restantes términos expuestos por la a quo, en cuanto a la autorización de los descuentos en salud y la indexación de las sumas a pagar en cumplimiento de esta sentencia.

CUARTO: costas en primera instancia únicamente a cargo de **PORVENIR S.A.**, se revoca las impuestas a Colpensiones. En esta instancia no se estiman causadas.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(Firmas escaneadas)



CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 059 fijados hoy en la secretaria de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 12 de ABRIL DE 2021

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>